

VII. REFORMAS POLÍTICAS Y RENOVACIÓN ÉTICA

REFORMAS POLÍTICAS Y RENOVACIÓN ÉTICA

Milagros PÉREZ OLIVA*

SUMARIO: I. Naturaleza y funcionamiento de las estructuras políticas. II. Sistema de creación de opinión pública.

Resumen

Cuando se cumplen 40 años de la aprobación de la Constitución, la arquitectura institucional española da señales alarmantes de deterioro. El sistema surgido de la Transición necesita reformas urgentes que requieren de amplios consenso, pero la degradación de la esfera pública impide que se den las condiciones necesarias para alcanzarlos. Los cambios globales que estamos viviendo introducen factores de incertidumbre e inquietud sobre el ánimo de la ciudadanía. A ello hay que añadir el desánimo y la impotencia que genera la erosión de la moral pública en nuestro país. La corrupción y su banalización son el principal síntoma de un deterioro que afecta tanto a los mecanismos de producción de la política como a los instrumentos de creación de opinión. La evolución del sistema de partidos y la tripe crisis que atenaza a los medios de comunicación inciden negativamente sobre el clima político.

Abstract

When 40 years have passed since the Constitution was approved, the Spanish institutional architecture shows alarming signs of deterioration. The political system emerged from the Transition needs urgent reforms that require broad consensus, but the degradation of the public sphere prevents the necessary conditions to achieve them. The global changes

* Periodista. Actualmente trabaja como articulista y miembro del equipo de editoriales del diario *El País* y colaboradora como analista en diversos programas de radio y televisión, entre ellos *Hora 25* de la Cadena Ser, *Els Matins* de TV3, *El Matí* de Catalunya Radio o *Vespre a la dos* de TVE.

that we are living introduce uncertainty and concern in the citizens' mood. To this we must add the discouragement and impotence that generates the erosion of public morals in our country. Corruption and its banalization are the main symptom of a deterioration that affects both the production mechanisms of politics and the instruments for creating public opinion. The evolution of the party system and the triple crisis that grips the media have a very negative impact on the political climate.

El sistema político surgido de la Transición y completado con las reformas y desarrollos legislativos de los años ochenta no solo permitió que España se alineara «rápidamente con los estándares políticos e institucionales de los países avanzados, sino que ha dado al país las décadas de mayor prosperidad económica y un despliegue de los derechos civiles que nos han situado entre los países más avanzados del mundo. Pero todos los sistemas necesitan adecuarse a los tiempos y existe un amplio consenso sobre la necesidad de emprender reformas en profundidad. Son todas ellas reformas complejas, que requieren de grandes consensos y un clima político constructivo y sosegado. ¿Lo tenemos? Me temo que no.

Cuando se cumplen 40 años de la aprobación de la Constitución, la arquitectura institucional española da señales alarmantes de deterioro y fatiga de materiales. Y justo cuando eso ocurre, estamos asistiendo a una alarmante degradación de la esfera pública. Ese deterioro tiene que ver con fenómenos y tendencias globales, pero también con factores específicos de nuestro propio sistema político y de valores que operan sobre un trasfondo general de creciente incertidumbre sobre el futuro que nos espera. En su libro póstumo *La metamorfosis del mundo*, Ulrich Beck nos advierte de que ya no vivimos solo en un tiempo de cambios, ni siquiera en un cambio de época. Vivimos tiempos de metamorfosis. Para el sociólogo alemán, a diferencia de los tiempos de revolución o de reforma, en la que los cambios obedecen a una idea previa y son impulsados por fuerzas sociales que empujan en una determinada dirección, la metamorfosis es el resultado de cambios que no tienen un objetivo determinado, sino que son el fruto de sinergias y transformaciones no controladas.

La revolución de la biología y el cambio climático serían los ejemplos paradigmáticos. Es evidente que la búsqueda de remedios para la infertilidad o el empeño por conocer y manipular el genoma tenían como propósito resolver problemas de salud, pero el conocimiento adquirido no solo nos da el control de los mecanismos de la reproducción sino que pone a la especie humana en condiciones de intervenir sobre la propia evolución como especie. Lo mismo ocurre con el cambio climático. El uso intensivo de los combustibles fósiles obedece a una lógica de optimización de los recursos disponibles que ha permitido el enorme salto productivo de la era industrial. En ningún caso se buscaba poner en riesgo la vida sobre el planeta, pero así ha sido.

Estos fenómenos crean una sensación de vértigo, de inseguridad que, unido a los efectos de una globalización mal gobernada, genera inquietud en amplias capas de la población, que tienden a expresar su miedo y su malestar a través de su participación en el sistema político. Este es el telón de fondo sobre el que opera nuestro sistema político, que en los últimos años ha experimentado una notable degradación.

Los altos índices de corrupción que hemos alcanzado son el síntoma más visible. La respuesta que han dado a la corrupción los principales implicados, negando la evidencia y resistiéndose a asumir responsabilidades políticas, indica hasta qué punto se han naturalizado conductas muy graves que en otros países serían escandalosas y provocarían dimisiones automáticas.

Esta degradación se traduce en una creciente desafección de la ciudadanía hacia el propio sistema político, como expresan reiteradamente las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). La eclosión de casos de corrupción motivó que a partir de 2010 esta cuestión escalara rápidamente posiciones entre los problemas que más preocupan a la ciudadanía. En marzo de 2013 se convirtió en el segundo problema que más preocupaba, justo por detrás del paro. El 44,5% de los españoles la situaba entre los tres principales problemas del país. Y ahora, cuando ya muchos de los casos más escandalosos han sido juzgados y sentenciados, todavía consideran que la corrupción es el principal problema un 33,3% de los españoles.

Tampoco sorprende que en paralelo haya caído la estima por los políticos. Los primeros años de la transición gozaron de un alto prestigio, pero ahora son percibidos no como parte de la solución sino como parte del problema. La desafección hacia los partidos y los políticos alcanzó su máxima expresión en marzo de 2013, en plena crisis económica, cuando un 31,4% de los españoles consideraban su forma de actuar como el principal problema del país.

Es evidente que tenemos un problema diferencial en la esfera de la moral pública. Algo falla en una democracia cuando proliferan los casos de corrupción y los corruptos no solo no se sienten avergonzados sino que reaccionan con actitudes desafiantes o con un descarado cinismo. Esta actitud tiene que ver con la erosión de ciertos valores y emociones sociales que son muy necesarios para la vida pública como la culpa y la vergüenza.

Sobre el papel de la culpa y la vergüenza en la esfera pública han escrito muchos autores, entre ellos Victoria Camps en *El gobierno de las emociones* o Marta Nausbaum en *El ocultamiento de lo humano: repugnancia, vergüenza y ley*. Resulta inquietante observar cómo se ha deteriorado en nuestra cultura un sentimiento que cuando está interiorizado por el cuerpo social nos protege contra la mala praxis en el ámbito institucional y de gestión pública.

Para Victoria Camps, es difícil mantener un sentimiento de culpa si no existe al mismo tiempo el de vergüenza. Si quienes se corrompen no sienten vergüenza, es porque la ley no les merece ningún respeto. Cuando la falta de respeto a la ley no produce vergüenza pública, lo que se genera cinismo. Este es un componente muy presente ahora mismo en la política española.

Cuando el filósofo norteamericano Jonh Rawls se plantea las causas del deterioro de la moral pública, lo vincula a la falta de autoestima. Define la vergüenza moral como el sentimiento que provoca en una persona ver en sí misma la falta de virtudes morales que debería haber adquirido. Y concluye que tanto la vergüenza moral como la culpa son necesarias para el buen funcionamiento de la sociedad.

Su ausencia en los gobernantes es especialmente nociva porque mina la confianza en la representación política. Genera además sentimientos de impotencia cuando la ciudadanía comprueba que no existen mecanismos eficaces y rápidos de coerción ante el fraude, el abuso o la elusión de la responsabilidad. En nuestro caso hemos visto todo tipo de estrategias para eludirla y una de las más frecuen-

tes ha sido alegar que la única culpabilidad que se acepta es la que dictamine un juez, al tiempo que se maniobraba para tratar de manipular o condicionar la acción de la justicia.

El riesgo de esta estrategia, como hemos visto, es que acabe contaminando también a la administración de justicia. La extrema lentitud con la que opera en España, que ha tardado a veces más de diez años en concluir un proceso por corrupción, facilita este tipo de estrategias tan nocivas a la confianza. En algunas de sus manifestaciones extremas, se ha llegado a pervertir la idea misma de la justicia como mecanismo de reproche y sanción pública. Por ejemplo cuando cargos representativos o miembros de un gobierno imputados en procesos de corrupción se han negado a asumir responsabilidades políticas alegando que «los electores nos han absuelto» tras ganar las siguientes elecciones. Así se cierra el círculo de la corrosión moral.

Las medidas de regeneración aplicadas hasta ahora son claramente insuficientes. La ley 19/2013 de «Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno» ha contribuido a tener mejor acceso a cierta información de interés público, pero no ha cambiado sustancialmente los problemas de fondo. El mal es muy profundo, porque gran parte de lo que ocurre en la esfera de la moralidad pública y las prácticas en el ejercicio del poder tienen que ver con los mecanismos de producción de la política. Tal como ha evolucionado la democracia representativa, la acción política está muy condicionada por los estados de opinión pública, y estos son cada vez más manipulables y volátiles.

Durante mucho tiempo, la opinión pública ha estado determinada en gran parte por la opinión publicada en los grandes medios de comunicación. Pero ahora eso también está cambiando. Internet y las redes sociales han transformado el ecosistema de la comunicación y en consecuencia, también los mecanismos de creación de opinión pública.

Estas mutaciones inciden sobre dos de los vectores que conforman la esfera pública: la naturaleza y funcionamiento de las estructuras políticas; y el sistema de comunicación y de creación de opinión pública, que trataré de desarrollar a continuación.

I. NATURALEZA Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS POLÍTICAS

Este primer vector tiene que ver con el rol que juegan los partidos políticos. La Constitución española los consagra como eje central del sistema institucional. La Constitución les otorga un papel absolutamente determinante. En el momento en que se redactó la Carta Magna, esa decisión tenía su lógica. Tras 40 años de dictadura y de un largo desierto cultural y cívico, la sociedad carecía de hábitos y mecanismos de participación. Era preciso por tanto impulsar, proteger y reforzar un instrumento de acción política potente y confiar en su buen hacer para sostener la calidad de la democracia que entonces se estrenaba.

Los constituyentes eran políticos surgidos en su mayor parte de los movimientos clandestinos que habían luchado contra el franquismo en busca de democracia, y por tanto, creían en las virtudes de los instrumentos del sistema que habían defen-

dido con tantos sacrificios. En los primeros años de la Transición estos instrumentos cumplieron su papel, pero poco a poco el sistema fue evolucionando en una dirección no esperada. En combinación con el régimen electoral, se consolidó un sistema político fuertemente bipartidista que tocó techo en las elecciones legislativas de 2008. Ese año, la suma de votos del PP y el PSOE fue la opción mayoritaria en todas las provincias. Estos dos partidos acapararon el 83,8% de los votos y el 92,3% de los escaños.

Dada la preeminencia que se dio a los partidos a la hora de configurar las mayorías y la gobernanza de los tres poderes públicos, esa concentración permitió que PP y PSOE colonizaran todo el entramado institucional. En su deriva final, el partido que controla el ejecutivo tiene en la práctica la llave de la gobernanza de los tres poderes. En el diseño institucional no se contemplaron contrapesos eficaces como los que hay en otros países y los mecanismos de supervisión y control previstos, como el Tribunal de Cuentas, pronto quedaron también colonizados por las dos fuerzas hegemónicas. Pese a que el sistema electoral prima las circunscripciones con menos población, el bipartidismo entró en crisis a partir de 2008. Los cambios sociales que lo hicieron posible tuvieron su máxima expresión política en el movimiento del 15-M y la aparición de nuevas fuerzas políticas.

El fin del bipartidismo puede tener efectos positivos. Aunque ha dado lugar a una gran fragmentación política, el nuevo modelo se ajusta mejor a pluralidad de la sociedad. Pero para que sea efectivo en el plano institucional será preciso cambiar una cultura política muy arraigada en la que la disposición al diálogo y al pacto son vistos como un signo de debilidad. Hemos de esperar que los políticos sepan hacer, en este caso, de la necesidad virtud.

Otro de los vectores que incide en la degradación de la vida pública es el sistema de reclutamiento de liderazgos. Con el paso del tiempo los dos partidos hegemónicos a nivel nacional y los partidos nacionalistas que lo han sido en Cataluña y el País Vasco se han convertido en maquinarias ensambladas en el aparato institucional cuyo funcionamiento se asimilaba cada vez más al de una empresa de gestión del poder y de colocación de cuadros. Los principios de vocación política y servicio público se han ido desdibujando y el resultado es un sistema de reclutamiento que, con carácter general, tiende a primar la fidelidad sobre los méritos o la capacidad.

Ahora que la generación que impulsó la Transición se ha retirado o está llegando al final de su carrera, ¿con qué canteras de liderazgo cuenta la política española? Durante mucho tiempo la provisión de cargos públicos se ha regido por un sistema de cooptación interna a través de los partidos políticos. La militancia partidaria ha pasado a ser la principal vía de promoción a cargos políticos. Tenemos ya un número importante de gobernantes y cargos electos que siempre han sido profesionales de la política y que no han tenido otra actividad que la vinculada a su partido.

Por otra parte, la causa de la polarización la política se ha convertido en una profesión de alto riesgo y gran desgaste personal. Eso hace más difícil reclutar líderes y cargos en medios ajenos a las estructuras partidarias. ¿Quién, con prestigio en el ámbito privado, la academia o la profesión aceptará dedicarse a un sistema político que se ha convertido en una trituradora de fama y prestigio? Los valores y las formas se han deteriorado gravemente. Quien decida dar el salto a la política sabe que será sometido a un escrutinio brutal de todos los aspectos de su

vida por parte de los adversarios en busca de alguna vulnerabilidad. Y que, en el fragor de pugna partidista, la verdad no siempre será respetada.

Como consecuencia de los efectos de la crisis económica y del deterioro institucional, a partir de 2010 emergió una fuerte reacción política que tuvo su expresión más visible en el movimiento 15M y las diferentes «mareas» sectoriales. Estas movilizaciones han llevado a las instituciones en las últimas convocatorias electorales a políticos que proceden del activismo social. Aunque en algunos casos han tenido dificultades para adaptarse al rol institucional y han dado muestras de cierto adanismo, su incorporación ha sido un factor de renovación importante. Han rejuvenecido el poder legislativo, han contribuido indirectamente a la renovación de los viejos partidos y, en la medida de que vienen acompañados de un proceso de repolitización de la juventud, pueden ser el germen de cambios más profundos.

En todo caso, nos encontramos en un momento de transición. Se observan fuertes impulsos de cambio, pero también de resistencia. Y entretanto, las formas de la política han continuado deteriorándose. Vivimos un tiempo de polarización extrema en la que más que persuadir a la ciudadanía, los líderes buscan desgastar al adversario y fomentar la adhesión incondicional de los afines. Los mismos dirigentes que aplican al contrincante las más estrictas exigencias morales disculpan en sus correligionarios las peores faltas. Y no dudan en faltar a la verdad si respetarla les resta oportunidades electorales.

La mentira siempre ha estado presente en la batalla política. Lo novedoso es la frecuencia y el descaro con el que ahora se recurre a ella. El uso premeditado y desafiante de la distorsión del lenguaje y la tergiversación de los hechos supone un salto cualitativo de consecuencias que todavía no podemos calibrar bien. Diversos estudios han analizado el papel que tuvieron en la elección del presidente Donald Trump en Estados Unidos las campañas de bulos y mentiras lanzadas a través de las redes sociales. Son también concluyentes y muy preocupantes las investigaciones realizadas sobre el papel que tuvo la desinformación deliberada en el resultado del referéndum del Brexit en Reino Unido. La difusión de datos falsos contribuyó decisivamente a crear una opinión desfavorable a la permanencia en la UE que tuvo su reflejo en las urnas. El debate posterior en torno a las condiciones de salida de la UE ha demostrado que gran parte de las premisas en las que se basó el voto contrario a la permanencia eran falsas.

El problema es que ahora políticos del máximo nivel no solo mienten descaradamente, sino que se creen con derecho a hacerlo. La desfachatez de la mentira como instrumento político tuvo un momento culminante cuando Kellyanne Conway, asesora de Prensa de Trump, acuñó el término «hechos alternativos» en el programa *Meet the Press* de la cadena de televisión NBC. El jefe de Prensa del nuevo presidente, Sean Spicer, había afirmado en la primera comparecencia ante los periodistas acreditados en la Casa Blanca que la toma de posesión de Donald Trump había sido la más concurrida de la historia de EEUU, cuando una comparación de los registros fotográficos mostraba sin lugar a dudas que la asistencia había sido muy inferior a la que congregó en la misma circunstancia Barack Obama. Para Kellyanne Conway, Spicer no había mentido. Simplemente había ofrecido «hechos alternativos».

Con la invención de este concepto para salir del apuro, Conway estaba dando, sin querer, una de las claves de ese nuevo fenómeno denominado *postverdad*. Ya no

se trataba de legitimar que pudiera haber dos versiones, dos percepciones distintas de un mismo hecho cierto, sino que se pueden falsear los hechos mismos.

Si la utilización deliberada de la mentira da réditos electorales es porque la verdad se ha devaluado en nuestro sistema cultural y de valores. Así lo advierte el filósofo Joan García del Muro en su libro *Good bye veritat. Una aproximació a la postveritat* (Pagès editors). El autor busca en este ensayo las raíces filosóficas de la *postverdad* y las sitúa en el influjo cultural y político que ha tenido el pensamiento postmoderno. Surgido como reacción a los grandes dogmas que condujeron a los totalitarismos del siglo XX y sus secuelas trágicas, el postmodernismo se caracterizó por un rechazo frontal a la noción de verdad.

Al calor de esta corriente se han mezclado peligrosamente elementos que han erosionado los mecanismos de deliberación pública: el desprestigio del pensamiento racional y la exaltación de la subjetividad y las emociones; un relativismo radical y militante según el cual hay tantas verdades como miradas sobre la realidad, y la supeditación de los hechos a la interpretación de los mismos. Uno de sus exponentes, Richard Rorty, ilustra muy bien a dónde nos lleva esta deriva: en la sociedad liberal, dice, «la diferencia entre verdad y mentira es una cuestión de éxito, y al final, por eso mismo, de poder. En la retórica de las narrativas, alcanzará la verdad aquel que consiga imponer la suya».

De eso va la acción política ahora, de tratar de imponer un relato sobre la realidad. Y si es preciso, de crear verdades alternativas. No importa si este relato no concuerda con los hechos factuales. Quien tenga poder para imponer ese relato, habrá ganado la batalla. En *Covering Politics in a Post Truth America*, la directora de *Político*, Susan B. Glasser, expresa la impotencia que muchos políticos, analistas y ciudadanos sienten ante el triunfo de la mentira en las redes sociales. Glasser concluye que nunca ha habido tanta información seria disponible y de tanta calidad como ahora, pero lamenta que disponer de información de calidad parece importar cada vez menos.

Si quienes nos gobiernan creen que pueden permitirse mentirnos sabiendo que los vamos a descubrir inmediatamente es porque dan por hecho que la verdad no nos importa. Y si asumen ese riesgo es porque confían en que les reportará algún beneficio. Saben que en la batalla política existen formas de conseguir que los hechos no cuenten. Lo que cuenta es construir un relato. No importa que no responda a la realidad siempre que sea coherente. El primer objetivo del relato es reforzar el discurso entre los propios partidarios, que ya se encargarán de defenderlo ante los adversarios en los foros y debates públicos.

Por otra parte, el debate político deriva cada vez más hacia el terreno de las emociones, y eso también tiene consecuencias sobre el ecosistema político como muy bien ha señalado Manuel Arias Maldonado en *La democracia sentimental. Política y emociones en el siglo XXI* (Página Indómita 2016). Los políticos apelan a las emociones y los ciudadanos se relacionan con la política desde los sentimientos. La narrativa y las imágenes tienen un papel destacado en el discurso de los políticos, que van siempre de la mano de sus *spin doctors*, esos asesores de comunicación tan bien formados en las técnicas de retorcimiento del lenguaje.

Quienes recurren a estos procedimientos dan por hecho que no nos importa que nos mientan, siempre que quien lo haga sea de los nuestros. Confían en que, en un escenario político muy crispado y polarizado, que ellos contribuyen a crear, el estímulo de las emociones provocará en los electores distorsiones cognitivas de

las que podrán beneficiarse. Distorsiones que forman parte del funcionamiento normal de nuestra mente, como aquella que nos induce a creer sin reservas lo que viene de quienes consideramos afines y rechazar de plano lo que procede de los contrarios; o la tendencia a encerrarnos en nuestra propia burbuja ideológica porque nos produce bienestar aquello que coincide con nuestras creencias previas y malestar lo que las contradice.

La utilización de estas técnicas de persuasión está provocando un deterioro muy acusado de las formas de expresión política. Vemos cada vez con más frecuencia cómo candidatos y formaciones políticas diversas recurren deliberadamente a estrategias de crispación para obtener réditos electorales. La creciente polarización política viene acompañada de una degradación del lenguaje y una preocupante teatralización de la política. El Parlamento no es ya solo el lugar donde se discuten las diferentes alternativas legislativas, sino el escenario en el que se «representa» la política, una especie de caja de resonancia para lanzar mensajes a la audiencia. Las sesiones de control al Gobierno se han convertido en un instrumento preferido para crear, empaquetar y enviar a las audiencias píldoras políticas de consumo rápido.

II. SISTEMA DE CREACIÓN DE OPINIÓN PÚBLICA

Hemos visto qué efectos tiene la alteración de los mecanismos tradicionales de producción de la política, pero el clima de crispación y degradación de la conversación pública resultante tiene que ver también con la forma de operar de los medios de comunicación, que en estos momentos afrontan una grave crisis existencial y están sometidos a un fuerte estrés. La irrupción de las redes sociales ha impactado sobre el ecosistema mediático de modo que el papel de los medios tradicionales ha quedado profundamente alterado. Las nuevas posibilidades de acceso a la información que ofrece Internet han modificado los hábitos de consumo y entretenimiento. La fragmentación de las audiencias y el consumo a la carta están afectando a las televisiones y la irrupción de canales de información gratuita pone en riesgo la viabilidad de la prensa escrita, a la que se sigue atribuyendo un papel determinante en la creación de opinión pública.

La prensa escrita atraviesa la peor crisis de su historia. Sufre el impacto de tres crisis simultáneas, la crisis económica, la de modelo industrial y la crisis de credibilidad que se potencian mutuamente y generan sinergias negativas, hasta el punto de que muchas cabeceras se encuentran en una situación agónica.

La gran recesión que se inició en 2008 tuvo un fuerte impacto sobre las dos principales fuentes de ingresos de la prensa: la publicidad y la venta en quiosco. Los medios han perdido en este tiempo entre el 40% y el 60% de los ingresos por publicidad y los gestores dan por hecho que aunque la economía se recupere totalmente, los altos ingresos por publicidad de los años dorados de las últimas décadas no volverán. La razón es que ha surgido un competidor tan poderoso como implacable: las plataformas y redes digitales, que ya acaparan el 80% de las inversiones publicitarias.

La revolución digital también ha provocado una caída de la venta en quiosco. Los seis diarios de mayor tirada en España han perdido en apenas una década el 60% de la difusión y esta sigue cayendo a razón de un 6% anual. El de la comu-

nicación ha sido, en términos de destrucción relativa de empleo, el segundo sector más afectado por la crisis económica después de la construcción.

Esta caída de la difusión de las ediciones impresas está relacionada con la segunda de las crisis mencionadas, la de modelo industrial. Internet multiplicado las fuentes de emisión informativa y ha instaurado una cultura de la gratuidad que afecta muy negativamente al modelo de negocio de la prensa escrita. Si pueden obtener la misma información sin coste, los lectores prefieren no pagar. Todas las cabeceras se han adaptado a las nuevas posibilidades tecnológicas de comunicación ofreciendo a sus lectores ediciones digitales de acceso gratuito. Eso ha multiplicado las audiencias, pero ha hundido la venta en quiosco de las ediciones impresas, que sin embargo siguen siendo la principal fuente de ingresos. De seguir cayendo, el final puede estar muy cerca.

La crisis de modelo industrial ha provocado una doble paradoja. Nunca la prensa escrita había alcanzado tantos lectores como ahora. Gracias a Internet, la prensa escrita ya no está constreñida a un territorio. Su ámbito de expansión llega, sin costes adicionales, allí donde llega la lengua en la que se expresa. De los 20 millones de usuarios únicos al mes que tiene la edición digital de *El País*, la mitad están fuera de España. Pero ese aumento de la audiencia no se corresponde con un incremento de los ingresos. Nunca antes la prensa había recibido tan poco retorno por los contenidos que ofrece.

La segunda paradoja es que la edición digital, gracias a las mejoras tecnológicas, es mucho más completa y extensa que la impresa. Los mecanismos de edición y difusión permiten actualizar constantemente los contenidos y enriquecerlos con formatos audiovisuales. Pero quienes se benefician de esas ventajas no pagan y los ingresos publicitarios a través de la de la web no han alcanzado niveles capaces de reemplazar el nivel que había alcanzado la publicidad en las ediciones impresas. Las ediciones digitales acaparan por tanto la mayor parte de los recursos y de los esfuerzos en la producción de contenidos, pero la viabilidad de las cabeceras sigue dependiendo de los ingresos de la edición impresa. Incluso en los medios con un desarrollo digital más exitoso, como *The New York Times*, la publicidad digital no supera el 50% de los ingresos. En la mayoría de los casos, estos ingresos siguen siendo globalmente insuficientes para mantener los estándares de calidad y garantizar la viabilidad de la marca a largo plazo.

La transformación digital todavía no ha concluido. De momento ha provocado una convergencia en los formatos, pues todos los medios, ya sean de prensa, radio o televisión, se están transformando en plataformas multimedia. Se espera que en un futuro no muy lejano estas plataformas sean capaces de producir y empaquetar contenidos distintos para diferentes segmentos de audiencia.

Mientras tanto, la transformación digital ha introducido algunos factores de distorsión que afectan a los mecanismos de creación de opinión pública. Antes de la irrupción de Internet, la prensa escrita tenía lectores. Mantenía con ellos un vínculo que se concretaba en un contrato implícito que se renovaba cada mañana en el quiosco. En el soporte digital ese vínculo desaparece o se difumina. Los periódicos han pasado de tener lectores a tener audiencia. La tecnología permite ahora medir la evolución de esa audiencia al minuto, saber cuánto tiempo dedica a un artículo y conocer sus preferencias. Inevitablemente, esto lleva a aplicar estrategias de captación de la audiencia, con recursos para llamar la atención y conseguir el mayor número de *clicks* posibles, lo que ha reforzado la tendencia a la espectacularidad en

la elección y presentación de contenidos y ha acentuado la confusión entre información y entretenimiento.

El drama de los medios tradicionales en sistema de difusión que ha propiciado la revolución digital es que cuanto más contenidos ofrecen, menos valor tienen. Dependen de las plataformas tecnológicas como *Facebook* o *Twitter* y de buscadores como *Google* para difundir los contenidos que producen, pero son las plataformas las que se apropian de los beneficios que esos contenidos generan en forma de publicidad o de explotación de los datos personales, que es la nueva mina de oro de la economía de plataformas. Dicho de otra manera, mientras los medios han de asumir los costes de la producción de los contenidos, las plataformas se llevan la mayor parte de los beneficios.

La cultura de la gratuidad está siendo letal para las cabeceras de prensa. Los lectores se pasan en masa a la edición digital. Tras años de dudas e incertidumbre, los gestores están llegando a la conclusión de que la única forma de sobrevivir es volver al sistema del doble ingreso, por publicidad y por aportaciones de los lectores. Solo así los medios podrán mantener su independencia y obtener ingresos suficientes para garantizar su viabilidad. En los últimos años son muchos los medios, entre ellos *The New York Times* o *The Washington Post*, que han introducido muros porosos de pago para poder acceder a sus ediciones digitales. En España, las principales cabeceras están técnicamente preparadas para hacerlo pero no acaban de dar el paso porque temen que ello reduzca considerablemente sus audiencias.

En todo caso, la cultura de la gratuidad ha tenido efectos perversos sobre la percepción de los ciudadanos. En un mundo acelerado y complejo como el que vivimos, producir información de calidad es más costoso que nunca. Requiere alta especialización y tiempo de investigación. El hecho de que los poderes económicos, empresas, marcas y corporaciones puedan convertirse en emisores directos de información hace que circule por la red una gran cantidad de relatos y datos, no siempre fidedignos, que responden a intereses parciales, a veces inconfesables. Acostumbrados a obtener información sin coste alguno, los ciudadanos han bajado la guardia y no se preguntan quién se la proporciona y por qué.

En su afán por ampliar audiencias los medios incurren con frecuencia en sesgos en el tratamiento de las noticias que tiene consecuencias directas sobre la calidad del debate público. Por ejemplo la tendencia a enfocar todos los asuntos desde su vertiente más polémica o impactante o a primar la bronca y el escándalo. Estas distorsiones informativas han tenido un papel determinante sobre la tercera crisis que afecta los medios de comunicación, la de credibilidad.

La pérdida de credibilidad del periodismo es consecuencia de sus propios errores, por supuesto, pero también de la crisis general de las intermediaciones. Se cuestiona el papel intermediario de los medios como se cuestiona el de los partidos o los sindicatos. «No nos representan», se gritaba en las plazas del 15-M contra los partidos políticos. «No representáis bien la realidad», le gritaban a la prensa. El cuestionamiento que sufre la intermediación periodística no es ajeno a la crisis que sufre la propia democracia representativa.

La calidad de la democracia depende en gran parte de la calidad de la información. Para tomar buenas decisiones, una sociedad debe disponer de información precisa y fiable sobre los asuntos que se dirimen. En la sociedad mediática hay mucha información, pero información no equivale a conocimiento. Es un requisito

imprescindible, pero no suficiente. No puede haber una buena deliberación democrática sin buena información.

Los medios tienen un papel crucial. Por una parte, son el escenario en el que se representa la política. El conjunto de los medios constituye, como recuerda Jonh B. Thompson, la esfera pública mediática a través de la cual se canalizan los procesos de creación de opinión pública. También son el principal instrumento de consolidación de los marcos conceptuales que sirven para encuadrar el debate público. El sociolingüista George Lakoff ha desarrollado ampliamente en *No pienses en un elefante* la importancia que estos marcos tienen en política. Controlar la agenda informativa implica controlar de qué se habla y cómo se enfocan los asuntos sobre los que se han de tomar decisiones políticas.

Uno de los problemas que afrontan las democracias occidentales es que con frecuencia, el discurso público se utiliza, no para crear opinión pública, sino para tratar de crear «realidad» a través de los marcos conceptuales y los relatos que se transmiten. Se trata de inducir una determinada percepción de las cosas capaz de inducir los comportamientos políticos deseados. La forma en que la extrema derecha fomenta el miedo al extranjero es un ejemplo.

Entre las técnicas complementarias que se utilizan figura el uso de la información como mecanismo de desgaste del adversario. A ese propósito sirve el periodismo de filtración, que con frecuencia se disfraza de periodismo de investigación pero no lo es. La diferencia entre periodismo de investigación y de filtración es que el primero obedece a un impulso del propio medio que, ejerciendo su función de control del poder, indaga y obtiene de forma independiente una información que alguien trata de ocultar. En el segundo, en cambio, es el poder el que instrumentaliza al medio de comunicación para sacar provecho político de la información que posee y cuya divulgación administra.

En su creciente papel como instrumento de la política, los medios han tenido en los últimos años una peligrosa deriva hacia el periodismo de trinchera, lo que les conduce a distorsiones informativas que minan su credibilidad. La defensa a ultranza de las posiciones políticas a las que son afines les convierte en actores activos de la política. Esta forma de proceder tiende a seleccionar la opinión y presentar las noticias de la forma más favorable a los intereses políticos que defiende. Conocedores de este mecanismo, los aparatos de los partidos confeccionan los argumentarios que sus dirigentes deben repetir para colonizar los medios de comunicación. Estos argumentarios tienen también el objetivo de construir el relato que los medios afines se encargarán de difundir. El resultado es el desprestigio del conjunto de los medios. Cuando los ciudadanos observan que de un mismo hecho se ofrecen versiones tan contradictorias, acaban pensando que ningún medio es fiable.

La libertad de expresión y el derecho a la información son bienes muy valiosos en una democracia. Formalmente, están garantizados por la Constitución y las leyes. Pero la pregunta que debemos hacernos es si en estos momentos los ciudadanos pueden ejercer realmente su derecho a recibir una información veraz y contrastada.

Todos estos factores dificultan enormemente los procesos de reforma política que se precisan. La distorsión del discurso público no permite un debate constructivo y sosegado. Para revertir esta situación hay que comenzar por algo muy elemental: reivindicar el derecho de la ciudadanía a la verdad. Una de las falacias que se han propagado con más insistencia es que la verdad no existe. Que hay tantas

verdades como miradas hay sobre la realidad. No es cierto. Pueden existir visiones e interpretaciones de la realidad, pero hay una verdad factual, comprobable y demostrable, a la que debemos atenernos.

«Ninguna sociedad puede permitirse despreciar o no respetar la verdad», sostiene el filósofo norteamericano Harry G. Frankfurt en su libro *Sobre la verdad*. «Una sociedad que de manera imprudente y obstinada se muestra negligente ante alguno de estos comportamientos [que niegan la existencia de una verdad factual] está abocada a la decadencia. Las civilizaciones nunca han podido prosperar ni podrán hacerlo sin cantidades ingentes de información fiable sobre los hechos. Para crear y mantener una cultura avanzada, es preciso que no nos dejemos debilitar por el error y la ignorancia».

Ya Spinoza advertía de que quien deprecia la verdad o le es indiferente, se desprecia a sí mismo o le es indiferente su propia vida. «No es solo un imperativo social», añade Frankfurt. «También es aplicable a nivel individual: las personas necesitan verdades que les permitan gestionar su manera de estar en el mundo. (...) Las relaciones sociales y comunitarias solo pueden ser eficientes y armoniosas si los ciudadanos tienen un grado de confianza razonable en que los demás, en general, son de fiar. La mentira debilita la cohesión de la sociedad humana de forma irreparable».

Defender la verdad es una forma de defender la democracia.

BIBLIOGRAFÍA

- ARIAS MALDONADO, M., *La democracia sentimental. Política y emociones en el siglo XXI*. 2016.
- BECK, U., *La metamorfosis del mundo*. Editorial Paidós. Colección Estado y Sociedad. 2017
- CAMPS, V., *El gobierno de las emociones*. Herder Editorial. Pensamiento. 2011.
- FRANKFURT, H. G., *Sobre la verdad*. Editorial Paidós, 2007.
- GLASSER, S. B., *Covering Politics in a Post Truth America*. Brookings Institution. 2016.
- GARCÍA DEL MURO, J., *Good by veritat. Una aproximación a la postveritat*. Pagès Editors. 2017.
- NAUSBAUM, M., *El ocultamiento de lo humano. Repugnancia, vergüenza y ley*. Katz editores. 2006.